

I VIOLENCIA Y NEPOTISMO: LA TRAYECTORIA DE LA ÉLITE POLÍTICA COLOMBIANA Y SUS CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS CUARENTA AÑOS

VIOLENCE AND NEPOTISM: THE CAREER OF THE COLOMBIAN POLITICAL ELITE AND ITS CHANGES IN THE LAST FORTY YEARS

JOSÉ MANUEL RIVAS OTERO
Universidad de Salamanca, España
jmrivas@usal.es

Decía Karl Marx en *El dieciocho brumario de Luis Bonaparte* que los hombres hacen su propia historia, pero no bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo las que ya existen y les han sido legadas por el pasado. Los políticos de Colombia son de igual modo hijos de su espacio y de su tiempo; sus trayectorias en la arena pública no pueden entenderse sin tener en cuenta que forman parte de un país que lleva más de medio siglo de conflicto armado interno, y se han caracterizado por el uso de la violencia y el nepotismo como herramientas para acceder o mantenerse en el poder.

La violencia ha marcado el rumbo de la historia de Colombia desde su independencia. En el siglo XIX se sucedieron luchas entre los partidos Liberal y Conservador y, tras una etapa de relativa calma durante el primer tercio del siglo XX, el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948 desencadenó el Bogotazo, un episodio de protestas y represiones violentas que fue el primer acto de un nuevo periodo de enfrentamiento partidista conocido como la Violencia (1948-1958). Después de la dictadura del gene-

ral Gustavo Rojas Pinilla (1953-1958), se restauró el mecanismo de elecciones para elegir gobierno y las principales familias liberales y conservadoras pactaron el establecimiento del Frente Nacional (1958-1974), un régimen que excluía de la vida política al resto de los partidos y movimientos. En 1964, el carácter excluyente del régimen y las operaciones de la fuerza pública contra las llamadas “repúblicas independientes” provocaron que un grupo de disidentes liberales y militantes del Partido Comunista, procedentes de zonas rurales, liderados por Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda, fundaran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y declararan la guerra al Estado. Se inició así el actual conflicto armado colombiano que polarizó al país, al menos en un primer momento, en dos facciones antagónicas: por un lado, la oligarquía tradicional, representada por liberales y conservadores que se turnaban en el gobierno y mantenían un férreo control sobre las instituciones político-representativas y represivas del Estado; y por otro lado, las fuerzas populares y de

izquierda, que se situaban al margen de las instituciones del régimen, empeñadas en la estrategia militar y desmanteladas políticamente por el conflicto. Ambas facciones se valieron de medios violentos para hacer política; las guerrillas optaron por la lucha armada como vía para alcanzar el poder político, mientras que los sucesivos gobiernos recurrieron a la fuerza del Ejército y al uso del estado de excepción para enfrentarlas. Entre 1948 y 1991 Colombia vivió más de 30 años bajo estado de sitio, por lo que, como sostiene Francisco Leal, hasta la Constitución de principios de los noventa, el Estado de Derecho estuvo abolido de facto. Además, las facultades extraordinarias del estado de sitio también se utilizaron para criminalizar y reprimir la protesta social con la excusa de combatir a los enemigos internos.

Otra forma de tener acceso y mantenerse en cargos de responsabilidad política en Colombia ha sido el nepotismo. En octubre de 1985, el periódico *El Tiempo* publicó un reportaje sobre los “hilos de sangre” en la política colombiana en el que se contabilizaron 53 vínculos matrimoniales entre los descendientes de los aproximadamente 90 presidentes de la República que había tenido el país hasta entonces, así como 96 vínculos de parentesco dentro del Congreso. Estos lazos familiares entre las élites políticas, sociales y económicas se han mantenido hasta el día de hoy tanto en la Presidencia como en el Congreso. Juan Manuel Santos, el presidente actual, es descendiente de una de las familias más prominentes de Colombia, vinculada al periodismo (en particular al centenario periódico *El Tiempo* y a

la revista *Semana*) y a la política; su tío abuelo, Eduardo Santos, fue presidente entre 1938 y 1942. Y Germán Vargas Lleras, el actual vicepresidente y probablemente próximo candidato oficialista a la presidencia, es nieto de Carlos Lleras Restrepo, ministro de Hacienda durante el gobierno de Eduardo Santos y presidente de Colombia entre 1966 y 1970. Asimismo, según los datos del Proyecto de Élités Parlamentarias de América Latina (PELA) de la Universidad de Salamanca, durante los periodos 1998-2002 y 2002-2006, el porcentaje de diputados colombianos que afirmaban tener familiares en política era superior al 60%, y desde entonces hasta la actual legislatura 2014-2018, la cifra se ha mantenido en torno al 50%. La trayectoria de los integrantes de las fuerzas populares y de izquierda no difiere mucho en cuanto a prácticas de nepotismo en el acceso a los cargos políticos. El ex alcalde de Bogotá y ex senador por el Polo Democrático Alternativo, Samuel Moreno, es nieto de Gustavo Rojas Pinilla e hijo de Samuel Moreno Díaz, ex congresista, y María Eugenia Rojas, ex candidata presidencial; su hermano, Iván Moreno, fue congresista, ministro y alcalde de Bucaramanga. Y la última candidata de la coalición de izquierda y actual ministra de Trabajo de Santos, Clara López, es sobrina del ex presidente Alfonso López Michelsen, y su tío abuelo, Alfonso López Pumarejo, fue presidente en dos periodos distintos.

Desde finales de la década de 1970, dos factores coyunturales afectaron al recorrido de las élites políticas en Colombia: el auge del narcotráfico y la apuesta por la salida negociada del conflicto. El narcotráfico recrudesció

el conflicto armado. Los cárteles de la droga, en especial el de Medellín liderado por Pablo Escobar, se sumaron a la ola de violencia que azotaba al país. Sus atentados más recordados fueron los asesinatos del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984 y del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989, y los secuestros de varias personalidades de la oligarquía política colombiana a comienzos de la década de 1990, entre ellas la hija del ex presidente Julio César Turbay (este episodio histórico fue narrado por Gabriel García Márquez en *Noticia de un secuestro*). Asimismo, promovieron la creación de los grupos paramilitares, fuerzas contrainsurgentes cuyo objetivo era eliminar a militantes y simpatizantes de izquierdas (el caso más dramático fue el genocidio de la Unión Patriótica). De esta forma, Colombia pasó de ser una “zona caliente” más de la Guerra Fría a convertirse en el país con el conflicto bélico más duradero de América; y todo ello se tradujo en un mayor coste en vidas humanas: entre 1987 y 1997 se registraron 270.000 homicidios y asesinatos (el 23% de ellos relacionados directamente con la confrontación armada, el negocio de la droga también impulsó las trayectorias políticas de congresistas, ministros y candidatos presidenciales; la narcopolítica primero y la parapolítica más tarde, salpicaron a la clase política colombiana con escándalos tan sonados como los del senador Alberto Santofimio, condenado por sus vínculos con el narcotráfico y el asesinato de Galán; el presidente Ernesto Samper, acusado por recibir financiación del Cártel de Cali; o los congresistas cercanos al presiden-

te Álvaro Uribe condenados por delitos cometidos en connivencia con el paramilitarismo.

El segundo factor que alteró la trayectoria de las élites políticas colombianas fue la apuesta por la solución negociada al conflicto, que permitió a las facciones enfrentadas asumir como un interés común el rechazo a la violencia como herramienta política, sin alterar la tendencia al nepotismo. Los primeros diálogos entre el gobierno y los insurgentes comenzaron durante el mandato del conservador Belisario Betancur (1982-1986), un presidente *outsider* que no pudo acabar con el conflicto, pero que abrió la puerta de la salida negociada. Las negociaciones de paz entre su sucesor en el cargo, el liberal Virgilio Barco (1986-1990) y la guerrilla del M-19 culminaron con la desmovilización y entrega de armas de esta última, y con su transformación en partido político, la Alianza Democrática M-19 (AD-M19). El proceso no fue sencillo, un mes antes de las elecciones presidenciales, en abril de 1990, las Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas por Carlos Castaño, ordenaron el asesinato del candidato y ex guerrillero del M-19 Carlos Pizarro, que se convirtió en el cuarto aspirante presidencial asesinado desde 1987, tras Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo (ambos de la Unión Patriótica) y Luis Carlos Galán. Pero la paz trajo también reformas sustanciales. En las elecciones de marzo de 1990, el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta logró impulsar la Asamblea Constituyente en la que por primera vez desde 1970 la segunda fuerza política más votada no era ninguno de los dos partidos tradicionales. El resultado final

fue la aprobación en 1991 de una nueva Constitución que diseñó sobre el papel un nuevo régimen político, incorporó derechos sociales de tercera y cuarta generación y creó la Corte Constitucional, que en el futuro desempeñaría un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos en Colombia. El gobierno del liberal César Gaviria (1990-1994) continuó los diálogos de paz con grupos guerrilleros, logrando que algunos de ellos se desmovilizaran, pero a su vez también impulsó reformas neoliberales (la apertura económica) que desdibujaron las bases sociales de la nueva constitución. En los ocho años siguientes el sistema de partidos se realineó; las fuerzas populares y de izquierda perdieron apoyo social y electoral, mientras que los liberales y conservadores volvieron a ganar el gobierno y ser los partidos con mayor representación en el Congreso. En 1998 llegó a la presidencia el conservador Andrés Pastrana, hijo del ex presidente Misael Pastrana. El estallido de la crisis financiera (el PIB de Colombia pasó de crecer un 3,4% en 1997 a decrecer un 4,2% en 1999) y el fracaso de las negociaciones de paz con las FARC provocaron el descontento con la clase política tradicional, deslegitimó la salida negociada al conflicto y favoreció nuevos liderazgos. En los comicios siguientes, Álvaro Uribe, un disidente liberal que había sido gobernador de Antioquia, ganó la presidencia y durante sus dos mandatos (2002-2006 y 2006-2010) implementó una política de “mano dura” (Seguridad Democrática) contra las guerrillas valiéndose de una fuerza pública reforzada gracias al Plan Colombia. En 2010, Juan Manuel Santos, candidato

oficialista y ex ministro de Defensa con Uribe, ganó la presidencia y comenzó su mandato con una fuerte ofensiva contra la insurgencia; pero pronto dio un giro a la política de su antecesor, primero impulsando la normalización de las relaciones con Venezuela y, más tarde, dando inicio al proceso de paz de La Habana que, tras más de tres años de diálogos, dio como resultado el histórico alto al fuego definitivo en junio de 2016. Las negociaciones de paz provocaron la división de la oligarquía tradicional en dos grupos: santistas, partidarios del proceso, y uribistas, contrarios al mismo.

Actualmente en Colombia conviven estos dos factores: el narcotráfico continúa desempeñando un papel fundamental en la escena política, social y económica, aunque su incidencia en el acceso a cargos de responsabilidad política es menor que antes, o al menos, no tan visible; y la lógica de las negociaciones se ha impuesto (por ahora) frente al uso de la violencia y al discurso del miedo defendido por los uribistas. Si bien el nepotismo se ha adaptado bien a los cambios y continúa siendo la constante de la trayectoria política en Colombia, el acuerdo de paz firmado por el gobierno y las FARC podría ser el primer paso para acabar con la violencia política en el país. Las élites políticas colombianas se han mantenido en escena gracias a que hicieron suya la máxima formulada por Nicolás Maquiavelo en *El príncipe* de que prospera quien armoniza su modo de proceder con la condición de los tiempos mientras que decae aquel cuya conducta entre en contradicción con ellos. Si en el futuro impera la paz en Colombia, el recorrido político de aquellos que apuestan por so-

luciones violentas tendrá los días contados; si fracasan los acuerdos, los colombianos, como la familia Buendía en la novela *Cien años de soledad*, continuarán viviendo las mismas circunstancias una y otra vez, conducidos por unas élites enfrentadas a sangre y fuego.

| José Manuel Rivas Otero es investigador y doctorando del Área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Sus líneas de investigación son el liderazgo político, el populismo y la resolución de conflictos.